

CONGRESO NACIONAL
CAMARA DE SENADORES
SESIONES ORDINARIAS DE 2005
ORDEN DEL DIA N° 117

Impreso el día 6 de abril de 2005

SUMARIO

COMISION DE LEGISLACION GENERAL; DE POBLACION Y
DESARROLLO HUMANO; DE JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES; DE
SEGURIDAD Y NARCOTRAFICO, Y DE PRESUPUESTO Y
HACIENDA

Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión, por el que se crea el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. (CD- 65/04)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras Comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano, de Justicia y Asuntos Penales, de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley venido en revisión (CD-65/04) y tenidos a la vista los proyectos de ley (S-114/04) del senador Jorge A. Agundez; (S-1.010/04) de la senadora Liliana Negre de Alonso; (S-1177/04) de las señoras senadoras Ibarra, Perceval y otros; (S-1253/04) de la senadora Leguizamón y otros; (S-1530/04) del senador Massoni; S-2523/04 de Sen. Morales; (S-2709/04) de la senadora Curletti, todos ellos sobre Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes ; y, por las razones que oportunamente dará el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

LEY DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º.- OBJETO. Esta ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte.

Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño.

La omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces.

ARTICULO 2º.- APLICACIÓN OBLIGATORIA. La Convención sobre los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los dieciocho años de edad. Las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en todos los ámbitos.

Las disposiciones de esta ley se aplicarán a las niñas, niños y adolescentes sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, de salud, de nacimiento o cualquier otra condición de la niña, niño o adolescente o de sus padres o de sus representantes legales.

Los derechos y las garantías de los sujetos de esta ley son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles.

ARTÍCULO 3º.- INTERÉS SUPERIOR. A los efectos de la presente Ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley.

Debiéndose respetar:

- a) Su condición de sujeto de derecho;
- b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta;
- c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural;
- d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales;
- e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común;
- f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia.

Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se ajustarán el ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña

o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancias vinculadas a las anteriores cualquiera sea el ámbito donde deba desempeñarse.

Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.

ARTICULO 4º- POLITICAS PUBLICAS.- Las políticas públicas de la niñez y adolescencia se elaborarán de acuerdo a las siguientes pautas:

- a) Fortalecimiento del rol de la familia en la efectivización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes;
- b) Descentralización de los organismos de aplicación y de los planes y programas específicos de las distintas políticas de protección de derechos, a fin de garantizar mayor autonomía, agilidad y eficacia;
- c) Gestión asociada de los organismos de gobierno en sus distintos niveles en coordinación con la sociedad civil, con capacitación y fiscalización permanente;
- d) Promoción de redes intersectoriales locales.
- e) Propiciar la constitución de organizaciones y organismos para la defensa y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. .

ARTICULO 5º.-RESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL.- Los Órganos Gubernamentales del Estado tienen la responsabilidad indelegable de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas sociales públicas con carácter federal.

En la formulación y ejecución de políticas públicas y su prestación, es prioritario para los Órganos Gubernamentales del Estado mantener siempre presente el interés superior de las personas sujetos de esta Ley y la asignación privilegiada de los recursos públicos que las garanticen.

Toda acción u omisión que se oponga a este principio constituye un acto contrario a los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes

Las políticas sociales de los Órganos Gubernamentales del Estado deben garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

La prioridad absoluta implica:

- 1. Protección y auxilio en cualquier circunstancia.
- 2. Prioridad en la exigibilidad de la protección jurídica cuando sus derechos colisionen con los intereses de los adultos, de las personas jurídicas privadas o públicas.
- 3. Preferencia en la atención, formulación y ejecución de las políticas sociales públicas.
- 4. Asignación privilegiada e intangibilidad de los recursos públicos que las garantice.
- 5. Preferencia de atención en los servicios esenciales.

ARTÍCULO 6º.- PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.- La Comunidad, por motivos de solidaridad y en ejercicio de la democracia participativa, debe y tiene derecho a ser parte

activa en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de las niñas, los niños y adolescentes.

ARTÍCULO 7º.- RESPONSABILIDAD FAMILIAR.- La familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías.

El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos.

Los Órganos Gubernamentales del Estado deben asegurar políticas, programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, y para que los padres asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones.

TITULO II PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTÍAS

ARTÍCULO 8º.- DERECHO A LA VIDA.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida, a su disfrute, protección y a la obtención de una buena calidad de vida.

ARTÍCULO 9º.- DERECHO A LA DIGNIDAD Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la dignidad como sujetos de derechos y de personas en desarrollo; a no ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio; a no ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico para cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel o degradante.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral.

La persona que tome conocimiento de malos tratos, o de situaciones que atenten contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña o adolescente, o cualquier otra violación a sus derechos, debe comunicar a la autoridad local de aplicación de la presente Ley.

Los Órganos Gubernamentales del Estado debe garantizar programas gratuitos de asistencia y atención integral que promuevan la recuperación de todas las niñas, niños y adolescentes.

ARTÍCULO 10.- DERECHO A LA VIDA PRIVADA E INTIMIDAD FAMILIAR. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida privada e intimidad de y en la vida familiar.

Estos derechos no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales.

ARTÍCULO 11.- DERECHO A LA IDENTIDAD. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes son sus padres, a la

preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de origen y a preservar su identidad e idiosincrasia, salvo la excepción prevista en los artículos 327 y 328 del Código Civil.

Los Órganos Gubernamentales del Estado deben facilitar y colaborar en la búsqueda, localización u obtención de información, de los padres u otros familiares de las niñas, niños y adolescentes facilitándoles el encuentro o reencuentro familiar.

Tienen derecho a conocer a sus padres biológicos, y a crecer y desarrollarse en su familia de origen, a mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y directo con sus padres, aún cuando éstos estuvieran separados o divorciados, o pesara sobre cualquiera de ellos denuncia penal o sentencia; salvo que dicho vínculo amenazare o violare alguno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que consagra la ley.

En toda situación de institucionalización de los padres, los Órganos Gubernamentales del Estado deben garantizar a las niñas, niños y adolescentes el vínculo y el contacto directo y permanente con aquellos, siempre que no contraríe el interés superior del niño.

Solo en los casos en que ello sea imposible y en forma excepcional tendrán derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en un grupo familiar alternativo o a tener una familia adoptiva, de conformidad con la ley.

ARTICULO 12.- GARANTIA ESTATAL DE IDENTIFICACION. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE ESTADO Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS. Los Órganos Gubernamentales del Estado deben garantizar procedimientos sencillos y rápidos para que los recién nacidos sean identificados en forma gratuita, obligatoria, oportuna e inmediatamente después de su nacimiento, estableciendo el vínculo filial con la madre, conforme al procedimiento previsto en la ley 24.540.

Ante la falta de documento que acredite la identidad de la madre o del padre, Los Órganos Gubernamentales del Estado deberán arbitrar los medios necesarios para la obtención de la identificación obligatoria consignada en el párrafo anterior, circunstancia que deberá ser tenida especialmente en cuenta por la reglamentación de esta ley.

Debe facilitar la adopción de medidas específicas para la inscripción gratuita en el Registro del Estado y Capacidad de las Personas, de todos aquellos adolescentes y madres, que no hayan sido inscriptos oportunamente.

ARTÍCULO 13.- DERECHO A DOCUMENTACIÓN. Las niñas, niños y adolescentes y madres indocumentadas, tienen derecho a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad, de conformidad con la ley.

ARTÍCULO 14.- DERECHO A LA SALUD. Los Órganos Gubernamentales del Estado deben garantizar :

a) El acceso a servicios de salud, respetando las pautas familiares y culturales reconocidas por la familia y la comunidad a la que

pertenecen siempre que no constituyan peligro para su vida e integridad;

b) Programas de asistencia integral, rehabilitación e integración;

c) Programas de atención, orientación y asistencia dirigidos a su familia;

d) Campañas permanentes de difusión y promoción de sus derechos dirigidas a la comunidad a través de los medios de comunicación social.

Toda institución de salud deberá atender prioritariamente a las niñas, niños y adolescentes y mujeres embarazadas. Los médicos están obligados a brindarles la asistencia profesional necesaria, la que no podrá ser negada o evadida por ninguna razón.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la atención integral de su salud, a recibir la asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de condiciones a los servicios y acciones de prevención, promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud.

ARTÍCULO 15.- DERECHO A LA EDUCACIÓN. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación pública y gratuita, atendiendo a su desarrollo integral, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía, su formación para la convivencia democrática y el trabajo, respetando su identidad cultural y lengua de origen, su libertad de creación y el desarrollo máximo de sus competencias individuales; fortaleciendo los valores de solidaridad, respeto por los derechos humanos, tolerancia, identidad cultural y conservación del ambiente.

Tienen derecho al acceso y permanencia en un establecimiento educativo cercano a su residencia. En el caso de carecer de documentación que acredite su identidad, se los deberá inscribir provisoriamente, debiendo los Órganos Gubernamentales del Estado arbitrar los medios destinados a la entrega urgente de este documento.

Por ninguna causa se podrá restringir el acceso a la educación debiendo entregar la certificación o diploma correspondiente.

Las niñas, niños y adolescentes con capacidades especiales tienen todos los derechos y garantías consagrados y reconocidos por esta ley, además de los inherentes a su condición específica.

Los Órganos Gubernamentales del Estado, la familia y la sociedad deben asegurarles el pleno desarrollo de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades, así como el goce de una vida plena y digna.

ARTÍCULO 16.- GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. La educación pública será gratuita en todos los servicios estatales, niveles y

regímenes especiales, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente.

ARTICULO 17.- PROHIBICIÓN DE DISCRIMINAR POR ESTADO DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y PATERNIDAD. Prohíbese a las instituciones educativas públicas y privadas imponer por causa de embarazo, maternidad o paternidad, medidas correctivas o sanciones disciplinarias a las niñas, niños y adolescentes.

Los Órganos Gubernamentales del Estado deben desarrollar un sistema conducente a permitir la continuidad y la finalización de los estudios de las niñas, niños y adolescentes.

La mujer privada de su libertad será especialmente asistida durante el embarazo y el parto, y se le proveerán los medios materiales para la crianza adecuada de su hijo mientras éste permanezca en el medio carcelario, facilitándose la comunicación con su familia a efectos de propiciar su integración a ella.

ARTICULO 18.- MEDIDAS DE PROTECCION DE LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD. Las medidas que conforman la protección integral se extenderán a la madre y al padre durante el embarazo y al período de lactancia, garantizando condiciones dignas y equitativas para el adecuado desarrollo de su embarazo y la crianza de su hijo.

ARTÍCULO 19.- DERECHO A LA LIBERTAD. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad.

Este derecho comprende:

- a) Tener sus propias ideas, creencias o culto religioso según el desarrollo de sus facultades y con las limitaciones y garantías consagradas por el ordenamiento jurídico y ejercerlo bajo la orientación de sus padres, tutores, representantes legales o encargados de los mismos;
- b) Expresar su opinión en los ámbitos de su vida cotidiana, especialmente en la familia, la comunidad y la escuela;
- c) Expresar su opinión como usuarios de todos los servicios públicos y, con las limitaciones de la ley, en todos los procesos judiciales y administrativos que puedan afectar sus derechos.

Las personas sujetos de esta ley tienen derecho a su libertad personal, sin más límites que los establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. No pueden ser privados de ella ilegal o arbitrariamente.

La privación de libertad personal, entendida como ubicación de la niña, niño o adolescente en un lugar de donde no pueda salir por su propia voluntad, debe realizarse de conformidad con la normativa vigente.

ARTÍCULO 20.- DERECHO AL DEPORTE Y JUEGO RECREATIVO.- Los Órganos Gubernamentales del Estado con la activa participación de la sociedad, deben establecer programas que garanticen el derecho de todas las niñas, niños y adolescentes a la recreación, esparcimiento, juegos recreativos y deportes. debiendo asegurar programas específicos para aquéllos con capacidades especiales.

ARTÍCULO 21.- DERECHO AL MEDIO AMBIENTE.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como a la preservación y disfrute del paisaje.

ARTÍCULO 22.- DERECHO AL HONOR.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser respetados en su honor, reputación y propia imagen.

Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen el honor o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar.

ARTÍCULO 23.- DERECHO DE LIBRE ASOCIACIÓN. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho de asociarse libremente con otras personas, con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos, laborales o de cualquier otra índole, siempre que sean de carácter lícito y de conformidad a la legislación vigente. Este derecho comprende, especialmente, el derecho a:

- a) Formar parte de asociaciones, inclusive de sus órganos directivos;
- b) Promover y constituir asociaciones conformadas exclusivamente por niñas, niños, adolescentes o ambos, de conformidad con la ley.

ARTÍCULO 24.- DERECHO A OPINAR Y A SER OÍDO. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a:

- a) expresar libremente su opinión en los asuntos en que tengan interés;
- b) que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y desarrollo.

Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelven las niñas, niños y adolescentes; entre ellos, al ámbito estatal, familiar, laboral, comunitario, social, escolar, científico, cultural, deportivo y recreativo.

ARTÍCULO 25.- DERECHO AL TRABAJO.- Los Órganos Gubernamentales del Estado deben reconocer el derecho de las personas adolescentes a trabajar con las restricciones que imponen la legislación vigente y los convenios internacionales sobre erradicación del trabajo infantil, debiendo ejercer la inspección del trabajo contra la explotación laboral de las niñas, niños y adolescentes.

Este derecho podrá limitarse solamente cuando la actividad laboral importe riesgo, peligro para el desarrollo, la salud física, mental o emocional de los adolescentes.

Los Órganos Gubernamentales del Estado, la sociedad y en particular las organizaciones sindicales coordinarán sus esfuerzos para erradicar el trabajo infantil y limitar toda forma de trabajo legalmente autorizada cuando impidan o afecten su proceso evolutivo.

En el desempeño de sus tareas o trabajos autorizados por las leyes no deben realizar los que sean peligrosos, que entorpezcan su educación, los que sean nocivos para su salud o desarrollo físico, mental, espiritual o social.

ARTÍCULO 26.-DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a obtener los beneficios de la seguridad social.

Los Órganos Gubernamentales del Estado deberán establecer un seguro social de inclusión para las niñas, niños y adolescentes, que considere los recursos y la situación de los mismos y de las personas que sean responsables de su mantenimiento.

ARTÍCULO 27. - GARANTÍAS MÍNIMAS DE PROCEDIMIENTO. GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS. Los Órganos Gubernamentales del Estado deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte; además de todos aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que en su consecuencia se dicten; los siguientes derechos y garantías:

- a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, niño o adolescente;
- b) A que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión que lo afecte;
- c) A ser asistido por un letrado especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos económicos el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine;
- d) A participar activamente en todo el procedimiento;
- e) A recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte.

ARTÍCULO 28.- PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. Las disposiciones de esta ley se aplicarán por igual a todos las niñas, niños y adolescentes, sin discriminación alguna fundada en motivos raciales, de sexo, color, edad, idioma, religión, creencias, opinión política, cultura, posición económica, origen social o étnico, capacidad especiales, salud, apariencia física o impedimento físico, de salud, el nacimiento o cualquier otra condición del niño o de sus padres o de sus representantes legales.

ARTÍCULO 29.- PRINCIPIO DE EFECTIVIDAD. Los Órganos Gubernamentales del Estado deberán adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de otra índole, para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos y garantías reconocidos en esta ley.

ARTICULO 30.- DEBER DE COMUNICAR. Los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y todo agente o funcionario público que tuviere conocimiento de la

vulneración de derechos las niñas, niños o adolescente, deberá comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión.

ARTICULO 31.- DEBER DEL FUNCIONARIO DE RECEPCIONAR DENUNCIAS. El agente público que sea requerido para recibir una denuncia de vulneración de derechos de los sujetos protegidos por esta ley, ya sea por la misma niña, niño o adolescente, o por cualquier otra persona, se encuentra obligado a recibir y tramitar tal denuncia en forma gratuita, a fin de garantizar el respeto, la prevención y la reparación del daño sufrido, bajo apercibimiento de considerarlo incurso en la figura de grave incumplimiento de los Deberes del Funcionario Público.

TÍTULO III SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ARTICULO 32.-CONFORMACION.- El Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes está conformado por todos aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o privadas, en el ámbito nacional, provincial y municipal, destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y establece los medios a través de los cuales se asegura el efectivo goce de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, demás tratados de derechos humanos ratificados por el Estado argentino y el ordenamiento jurídico nacional.

La Política de Protección Integral de Derechos de las niñas, niños y adolescentes debe ser implementada mediante una concertación articulada de acciones de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Municipios.

Para el logro de sus objetivos, el Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes debe contar con los siguientes medios:

- a)Políticas, planes y programas de protección de derechos;
- b)Organismos administrativos y judiciales de protección de derechos;
- c)Recursos económicos;
- d)Procedimientos;
- e)Medidas de protección de derechos.
- f)Medidas de protección excepcional de derechos

ARTÍCULO 33.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS.- Son aquellas emanadas del órgano administrativo competente local ante la amenaza o violación de los derechos o garantías de uno o varias niñas, niños o adolescentes individualmente considerados, con el objeto de preservarlos, restituirlos o reparar sus consecuencias.

La amenaza o violación a que se refiere este artículo puede provenir de la acción u omisión del Estado, la Sociedad, los particulares, los padres, la familia, representantes legales, o responsables, o de la propia conducta de la niña, niño o adolescente.

La falta de recursos materiales de los padres, de la familia, de los representantes legales o responsables de las niñas, niños y adolescentes, sea circunstancial, transitoria o permanente, no autoriza la separación de su familia nuclear, ampliada o con quienes mantenga lazos afectivos, ni su institucionalización.

ARTÍCULO 34.- FINALIDAD.- Las medidas de protección de derechos tienen como finalidad la preservación o restitución a las niñas, niños o adolescentes, del disfrute, goce y ejercicio de sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias.

ARTÍCULO 35.- APLICACIÓN.- Se aplicarán prioritariamente aquellas medidas de protección de derechos que tengan por finalidad la preservación y el fortalecimiento de los vínculos familiares con relación a las niñas, niños y adolescentes.

Cuando la amenaza o violación de derechos sea consecuencia de necesidades básicas insatisfechas, carencias o dificultades materiales, económicas, laborales o de vivienda, las medidas de protección son los programas dirigidos a brindar ayuda y apoyo incluso económico, con miras al mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos familiares.

ARTÍCULO 36.- PROHIBICIÓN.- En ningún caso las medidas a que se refiere el artículo 33 de esta ley podrán consistir en privación de la libertad conforme lo establecido en el artículo 19.

ARTÍCULO 37.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN.- Comprobada la amenaza o violación de derechos, deben adoptarse, entre otras, las siguientes medidas:

- a) Aquellas tendientes a que las niñas, niños o adolescentes permanezcan conviviendo con su grupo familiar;
- b) Solicitud de becas de estudio o para jardines maternos o de infantes, e inclusión y permanencia en programas de apoyo escolar;
- c) Asistencia integral a la embarazada;
- d) Inclusión de la niña, niño, adolescente y la familia en programas destinados al fortalecimiento y apoyo familiar;
- e) Cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar, orientando y apoyando a los padres, representantes legales o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones, conjuntamente con el seguimiento temporal de la familia y de la niña, niño o adolescente a través de un programa;
- f) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de la niña, niño o adolescente o de alguno de sus padres, responsables legales o representantes;
- g) Asistencia económica.

La presente enunciación no es taxativa

ARTÍCULO 38.- EXTINCIÓN. Las medidas de protección pueden ser sustituidas, modificadas o revocadas en cualquier momento por acto

de la autoridad competente que las haya dispuesto y cuando las circunstancias que las causaron varíen o cesen.

ARTÍCULO 39.- MEDIDAS EXCEPCIONALES. Son aquellas que se adoptan cuando las niñas, niños y adolescentes estuvieran temporal o permanentemente privados de su medio familiar o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio.

Tienen como objetivo la conservación o recuperación por parte del sujeto del ejercicio y goce de sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias.

Estas medidas son limitadas en el tiempo y sólo se pueden prolongar mientras persistan las causas que le dieron origen.

ARTICULO 40 : PROCEDENCIA DE LAS MEDIDAS EXCEPCIONALES. Solo serán procedentes cuando, previamente se hayan cumplimentado debidamente las medidas dispuestas en el artículo 33.

Declarada procedente esta excepción, será la autoridad local de aplicación quien decida y establezca el procedimiento a seguir, acto que deberá estar jurídicamente fundado, debiendo notificar fehacientemente dentro del plazo de 24 horas, la medida adoptada al juez competente en materia de familia de cada jurisdicción.

El funcionario que no de efectivo cumplimiento a esta disposición, será pasible de las sanciones previstas en el Capítulo IV del Código Penal de la Nación.

La Autoridad Competente de cada jurisdicción, en protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes dentro del plazo de 72 horas de notificado, con citación y audiencia de los representantes legales, deberá resolver la legalidad de la medida, resuelta ésta, la Autoridad Judicial competente deberá derivar el caso a la autoridad local competente de aplicación para que este implemente las medidas pertinentes.

ARTÍCULO 41.- APLICACIÓN. Las medidas establecidas en el artículo 39, se aplicarán conforme a los siguientes criterios:

a) Permanencia temporal en ámbitos familiares considerados alternativos. Las medidas consisten en la búsqueda e individualización de personas vinculadas a ellos, a través de líneas de parentesco por consanguinidad o por afinidad, o con otros miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según costumbre local, en todos los casos teniendo en cuenta la opinión de las niñas, niños y adolescentes;

b) Sólo en forma excepcional, subsidiaria y por el más breve lapso posible puede recurrirse a una forma convivencial alternativa a la de su grupo familiar, debiéndose propiciar, a través de mecanismos rápidos y ágiles, el regreso de las niñas, niños y adolescentes a su grupo o medio familiar y comunitario. Al considerar las soluciones se prestará especial atención a la continuidad en la educación de las niñas, niños y adolescentes; y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. Estas medidas deberán ser supervisadas por el organismo administrativo local competente y judicial interviniente.

- c) Las medidas se implementarán bajo formas de intervención no sustitutivas del grupo familiar de origen, con el objeto de preservar la identidad familiar de las niñas, niños y adolescentes;
- d) Las medidas de protección excepcional que se tomen con relación a grupos de hermanos deben preservar la convivencia de los mismos;
- e) En ningún caso, las medidas de protección excepcionales pueden consistir en privación de la libertad;
- f) No podrá ser fundamento para la aplicación de una medida excepcional, la falta de recursos económicos, físicos, de políticas o programas del organismo administrativo.

TITULO IV

ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

ARTICULO 42.- SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL. NIVELES.
El sistema de protección integral se conforma por los siguientes niveles:

- A) FEDERAL: Es el órgano de articulación, concertación, diseño y planificación de políticas públicas en todo el ámbito del territorio de la Republica Argentina;
- B) NACIONAL: Es el organismo técnico especializado en materia de derechos de infancia y adolescencia en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional;
- C) PROVINCIAL: Es el órgano de planificación y ejecución de las políticas de la niñez, cuya forma y jerarquía, determinará cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respetando las respectivas autonomías así como las instituciones preexistentes.

Las provincias podrán celebrar convenios dentro del marco jurídico vigente para municipios y comunas en las jurisdicciones provinciales, como asimismo implementar un organismo de seguimiento de programas de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en coordinación articulada con las organizaciones no gubernamentales de niñez, adolescencia y familia.

CAPÍTULO I

CONSEJO FEDERAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ARTICULO 43.- Créase el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, el que estará integrado por un representante de cada uno de los Ministerios con competencia en la materia, por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y los representantes de los Órganos de Protección de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia existentes o a crearse en cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Consejo Federal de la Niñez, Adolescencia y Familia dictará su propio reglamento de funcionamiento, el cual deberá ser aprobado en la primera reunión.

ARTICULO 44.- FUNCIONES.- El Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia tendrá funciones deliberativas, consultivas, de

formulación de propuestas y de políticas de concertación, cuyo alcance y contenido se fijará en el acta constitutiva.

Tendrá las siguientes funciones:

- a) Concertar políticas de protección integral de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias;
- b) Elaborar en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia un Plan Nacional de Acción como política de derechos para el área específica, de acuerdo a los principios jurídicos establecidos en la presente ley;
- c) Proponer e impulsar reformas legislativas e institucionales destinados a la concreción de los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño;
- d) Fomentar espacios de participación activa de los organismos de la sociedad civil de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconocidas por su especialidad e idoneidad en la materia, favoreciendo su conformación en redes comunitarias;
- e) Promover la supervisión y control de las instituciones privadas de asistencia y protección de derechos;
- f) Gestionar en forma conjunta y coordinada con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia la obtención de recursos financieros nacionales e internacionales para la efectivización de las políticas públicas de niñez, adolescencia y familia;
- g) Efectivizar conjuntamente con la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia la transferencia de los fondos a los Estados Provinciales para la financiación de dichas políticas.
- h) Gestionar la distribución de los fondos presupuestariamente asignados para la formulación y ejecución de las políticas previstas en el Plan Nacional de Acción.
- i) Establecer en coordinación con la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas destinadas a la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

CAPITULO II

SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ARTICULO 45.- SECRETARIA NACIONAL .- Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, organismo técnico especializado en materia de derechos de infancia y adolescencia, la que funcionará con representación interministerial y de las organizaciones de la sociedad civil.

ARTICULO 46.- FUNCIONES.- Son funciones de la Secretaría:

- a)Garantizar el funcionamiento del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia y establecer en forma conjunta, la modalidad de coordinación entre ambos organismos con el fin de establecer y articular políticas de acción.
- b)Elaborar en coordinación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, un Plan Nacional De Acción como política de

derechos para el área específica, de acuerdo a los principios jurídicos establecidos en esta ley;

c) Ejercer la representación necesaria ante todos los organismos oficiales de asesoramiento y contralor en materia de medios de comunicación;

d) Ejercer la representación del Estado Nacional en las áreas de su competencia;

e) Participar en forma conjunta con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia en la celebración y ejecución de los instrumentos de carácter internacional que la Nación suscriba o a los cuales adhiera, cuando éstos afecten o se refieran a la materia de su competencia;

f) Realizar los informes previstos en el artículo 44 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y ejercer la representación del Estado Nacional en su presentación, constituyéndose en depositario de las recomendaciones que se efectúen;

g) Promover el desarrollo de investigaciones en materia de niñez, adolescencia y familia;

h) Diseñar normas generales de funcionamiento y principios rectores que deberán cumplir las instituciones públicas o privadas de asistencia y protección de derechos de los sujetos de esta ley.

i) Apoyar a las organizaciones no gubernamentales en la definición de sus objetivos institucionales hacia la promoción del ejercicio de derechos de las niñas, niños y adolescentes, y la prevención de su institucionalización;

j) Promover políticas activas de promoción y defensa de los derechos de las niñas, niños adolescentes y sus familias;

k) Coordinar acciones consensuadas con los poderes del Estado, Organismos gubernamentales y Organizaciones no gubernamentales, fomentando la participación activa de las niñas, niños y adolescentes;

l) Propiciar acciones de asistencia técnica y capacitación a organismos provinciales y municipales y agentes comunitarios participantes en servicios de atención directa o en el desarrollo de los procesos de transformación institucional;

m) Gestionar conjuntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, la obtención de recursos financieros nacionales e internacionales para la efectivización de las políticas públicas de niñez, adolescencia y familia;

n) Efectivizar conjuntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia la transferencia de los fondos a los Estados Provinciales para la financiación de dichas políticas;

o) Organizar un sistema de información único y descentralizado que incluya indicadores para el monitoreo, evaluación y control de las políticas y programas de niñez, adolescencia y familia;

p) Fortalecer el reconocimiento en la sociedad de niñas, niños y adolescentes como sujetos activos de derechos.

q) Impulsar mecanismos descentralizados para la ejecución de programas y proyectos que garanticen el ejercicio de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias;

r) Asignar conjuntamente con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia los recursos públicos para la formulación y ejecución de las políticas previstas en el Plan Nacional de Acción.

s) Establecer en coordinación con el Consejo Federal de Niñez, adolescencia y familia mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas destinadas a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

CAPÍTULO III DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ARTÍCULO 47. - CREACIÓN. Crease la figura del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, quien tendrá a su cargo velar por la protección y promoción de sus derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales.

ARTICULO 48.- CONTROL. La defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes ante las instituciones públicas y privadas y la supervisión y auditoría de la aplicación del sistema de protección integral se realizará en dos niveles:

a) Nacional: a través del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;

b) Provincial: respetando la autonomía de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las instituciones preexistentes. Las legislaturas podrán designar defensores en cada una de las jurisdicciones, cuya financiación y funciones serán determinadas por los respectivos cuerpos legislativos.

ARTÍCULO 49.- DESIGNACIÓN. El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes será propuesto, designado y removido por el Congreso Nacional. quien designará una comisión bicameral que estará integrada por diez miembros, cinco de cada cámara respetando la proporción en la representación política, quienes tendrán a su cargo la evaluación de la designación que se llevará a cabo mediante un concurso público de antecedentes y oposición. Las decisiones de esta Comisión se adoptarán por el voto de las dos terceras partes de sus miembros.

El Defensor deberá ser designado dentro de los 90(noventa) días de sancionada esta ley y asumirá sus funciones ante el Honorable Senado de la Nación, prestando juramento de desempeñar fielmente su cargo.

ARTÍCULO 50.- REQUISITOS PARA SU ELECCIÓN.- El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescente, deberá reunir los siguientes requisitos:

a) Ser Argentino;

b) Haber cumplido 30 años de edad;

c) Acreditar idoneidad y especialización en la defensa y protección activa de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y familia

ARTÍCULO 51.- DURACIÓN EN EL CARGO.- El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes durará en sus funciones cinco (5) años, pudiendo ser reelegido por una sola vez.

ARTÍCULO 52.- INCOMPATIBILIDAD.- El cargo de Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescente es incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública, comercial o profesional a excepción de la docencia, estándole vedada, asimismo, la actividad política partidaria.

Dentro de los diez (10) días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión del cargo, el Defensor debe cesar en toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarlo, bajo apercibimiento de remoción del cargo.

Son de aplicación al Defensor, en lo pertinente, las normas en materia de recusación y excusación previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

ARTÍCULO 53.-DE LA REMUNERACIÓN. El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes percibirá la remuneración que establezca el Congreso de la Nación, por resolución de los presidentes de ambas Cámaras.

ARTICULO 54.- PRESUPUESTO. El Poder Ejecutivo Nacional destinará una partida presupuestaria para solventar los gastos del funcionamiento administrativo del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

ARTÍCULO 55.- FUNCIONES. Son sus funciones:

- a) Promover las acciones para la protección de los intereses difusos o colectivos relativos a las niñas, niños y adolescentes;
- b) Interponer acciones para la protección de los derechos las niñas, niños y adolescentes en cualquier juicio, instancia o tribunal;
- c) Velar por el efectivo respeto a los derechos y garantías legales asegurados a las niñas, niños y adolescentes; promoviendo las medidas judiciales y extrajudiciales del caso. Para ello puede tomar las declaraciones del reclamante, entenderse directamente con la persona o autoridad reclamada y efectuar recomendaciones con miras a la mejoría de los servicios públicos y privados de atención de las niñas, niños y adolescentes, determinando un plazo razonable para su perfecta adecuación;
- d) Incoar acciones con miras a la aplicación de la sanciones por infracciones cometidas contra las normas de protección de las niñas, niños y adolescentes; sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal del infractor, cuando correspondiera;
- e) Supervisar las entidades públicas y privadas que se dediquen a la atención de las niñas, niños o adolescentes, sea albergándolos en forma transitoria o permanente, sea desarrollando programas de atención a los mismos, debiendo denunciar ante las autoridades competentes cualquier irregularidad que amenace o vulnere los derechos de todas las niñas, las niños o los adolescentes.
- f) Requerir para el desempeño de sus funciones el auxilio de la fuerza pública, de los servicios médicos- asistenciales y educativos, sean públicos ó privados;
- g) Proporcionar asesoramiento de cualquier índole a las niñas, niños y adolescentes y a sus familias, a través de una organización adecuada;

- h) Asesorar a las niñas, niños, adolescentes y a sus familias acerca de los recursos públicos, privados y comunitarios, donde puedan recurrir para la solución de su problemática;
- i) Intervenir en la instancia de asesoramiento de mediación o conciliación;
- j) Recibir todo tipo de reclamo formulado por los niños, niñas o adolescentes o cualquier denuncia que se efectúe con relación a las niñas, niños y adolescentes, ya sea personalmente o mediante un servicio telefónico gratuito y permanente debiéndose dar curso de inmediato al requerimiento de que se trate.

ARTÍCULO 56.- INFORME ANUAL. El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes deberá dar cuenta anualmente al Congreso de la Nación, de la labor realizada en un informe que presentará antes del 31 de mayo de cada año.

Dentro de los sesenta (60) días de iniciadas las sesiones ordinarias de cada año, el Defensor deberá rendir dicho informe en forma verbal ante la Comisión Bicameral a que se refiere el artículo 49.

Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen podrá presentar un informe especial. Los informes anuales y especiales serán publicados en el Boletín Oficial, en los Diarios de Sesiones y en Internet.

El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en forma personal, deberá concurrir trimestralmente en forma alternativa a las comisiones permanentes especializadas en la materia de cada una de las Cámaras del Congreso Nacional a brindar los informes que se le requieran, o en cualquier momento cuando la Comisión así lo requiera.

ARTICULO 57.- CONTENIDO DEL INFORME. El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes deberá dar cuenta en su informe anual de las denuncias presentadas y del resultado de las investigaciones. En el informe no deberán constar los datos personales que permitan la pública identificación de los denunciantes, como así tampoco de las niñas, niños y adolescentes involucrados.

El informe contendrá un anexo en el que se hará constar la rendición de cuentas del presupuesto del organismo en el período que corresponda.

ARTÍCULO 58.- GRATUIDAD.- El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes determinará en forma exclusiva los casos a que dará curso; las presentaciones serán gratuitas, quedando prohibida la participación de gestores e intermediarios.

ARTÍCULO 59.- CESE. CAUSALES. El Defensor de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes cesa en sus funciones por alguna de las siguientes causas:

- a) Por renuncia;
- b) Por vencimiento del plazo de su mandato;
- c) Por incapacidad sobreviniente o muerte ;

- d) Por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso;
- e) Por notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo o por haber incurrido en la situación de incompatibilidad prevista por esta ley.

ARTICULO 60.- CESE Y FORMAS. En los supuestos previstos por los incisos a), c) y d) del artículo anterior, el cese será dispuesto por los Presidentes de ambas Cámaras. En el caso del inciso c), la incapacidad sobreviniente deberá acreditarse de modo fehaciente. En los supuestos previstos por el inciso e) del mismo artículo, el cese se decidirá por el voto de los dos tercios de los miembros presentes de la Comisión, previo debate y audiencia del interesado.

En caso de muerte del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se procederá a reemplazarlo en forma provisoria según el procedimiento establecido en el artículo siguiente, promoviéndose en el más breve plazo la designación del titular en la forma establecida en el artículo 56.

ARTÍCULO 61.- ADJUNTOS. A propuesta del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y conforme el procedimiento establecido en el artículo 56 podrán designarse dos adjuntos que auxiliarán a aquel en el ejercicio de sus funciones, pudiendo además, reemplazarlo en caso de cese, muerte, suspensión o imposibilidad temporal, en el orden en que fuesen designados.

ARTÍCULO 62- OBLIGACIÓN DE COLABORAR. Todas las Entidades, Organismos y personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, y las personas físicas están obligadas a prestar colaboración a los requerimientos del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con carácter preferente y expedito.

ARTÍCULO 63.- OBSTACULIZACIÓN. Todo aquel que desobedezca u obstaculice el ejercicio de las funciones previstas en los artículos precedentes incurrirá en el delito previsto en el artículo 239 del Código Penal.

El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes debe dar traslado de los antecedentes respectivos al Ministerio Público Fiscal para el ejercicio de las acciones pertinentes.

Puede requerir la intervención de la justicia para obtener la remisión de la documentación que le hubiera sido negada por cualquier organismo, ente, persona o sus agentes.

ARTÍCULO 64.- DEBERES. Comprobada la veracidad de la denuncia o reclamo, el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes deberá:

- a) Promover y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes mediante acciones y recomendaciones que efectuará ante las instancias públicas competentes, a fin de garantizar el goce y el ejercicio de los mismos;
- b) Denunciar las irregularidades verificadas a los organismos pertinentes quienes tienen la obligación de comunicar al Defensor de

los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes el resultado de las investigaciones realizadas;

c) Formular recomendaciones o propuestas a los organismos públicos o privados respecto de cuestiones objeto de su requerimiento;

d) Informar a la opinión pública y a los denunciantes acerca del resultado de las investigaciones y acciones realizadas. A tal efecto deberá establecerse un espacio en los medios masivos de comunicación.

CAPÍTULO IV DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

ARTÍCULO 65.- OBJETO.- A los fines de la presente ley se consideran organizaciones no gubernamentales de niñez y adolescencia a aquellas que, con Personería Jurídica y que en cumplimiento de su misión institucional desarrollen programas o servicios de promoción, tratamiento, protección y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

ARTÍCULO 66.-OBLIGACIONES.-Las Organizaciones no gubernamentales mencionadas en esta Ley deben cumplir con los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, Tratados Internacionales sobre los de Derechos Humanos en los que la República Argentina sea parte, y observar los siguientes principios y obligaciones:

a) Respetar y preservar la identidad de las niñas, niños y adolescentes y ofrecerles un ambiente de respeto, dignidad y no-discriminación;

b) Respetar y preservar los vínculos familiares o de crianza de las niñas, niños y adolescentes y velar por su permanencia en el seno familiar;

c) No desmembrar grupos de hermanos;

d) No limitar ningún derecho que no haya sido limitado por una decisión judicial;

e) Garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta en todos los asuntos que les conciernan como sujetos de derechos;

f) Mantener constantemente informado a la niña, niño o adolescente sobre su situación legal, en caso de que exista alguna causa judicial donde se pueda tomar una decisión que afecte sus intereses, y notificarle, en forma personal y a través de su representante legal, toda novedad que se produzca en forma comprensible cada vez que la niña, el niño o el adolescente lo requiera;

g) Brindar a las niñas, niños y adolescentes atención personalizada y en pequeños grupos;

h) Ofrecer instalaciones debidamente habilitadas y controladas por la autoridad de aplicación respecto de las condiciones edilicias, salubridad, higiene, seguridad y confort;

i) Rendir cuentas en forma anual ante la autoridad de aplicación, de los gastos realizados clasificados según su naturaleza; de las actividades desarrolladas descriptas en detalle; de las actividades programadas para el siguiente ejercicio descriptas en detalle, su

presupuesto, los gastos administrativos y los recursos con que serán cubierto. Se dará cuenta también de las actividades programadas para el ejercicio vencido que no hubieran sido cumplidas, y las causas que motivaron este incumplimiento.

ARTÍCULO 67. - INCUMPLIMIENTO.- En caso de incumplimiento de las obligaciones a que se hallan sujetas las organizaciones no gubernamentales de niñez y adolescencia mencionadas por esta ley, la autoridad local de aplicación promoverá ante los organismos competentes, la implementación de las medidas que correspondan.

ARTÍCULO 68. - REGISTRO DE LAS ORGANIZACIONES. Crease en el ámbito de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el Registro Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil con personería jurídica que desarrollen programas o servicios de asistencia, promoción, tratamiento, protección y defensa de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán implementar un Sistema de Registro de las Organizaciones no Gubernamentales con personería jurídica con el objeto de controlar y velar en cada jurisdicción por el fiel cumplimiento de los principios que establece esta ley, con comunicación a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia con miras a la creación del Registro Nacional de estas Organizaciones.

TITULO V FINANCIAMIENTO

ARTICULO 69.- La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia deberán en forma conjunta y coordinada garantizar la distribución justa y equitativa de las partidas presupuestarias y de todos los recursos nacionales o internacionales destinados a la efectivización de los objetivos de esta ley.

ARTICULO 70: TRANSFERENCIAS. El Gobierno Nacional acordará con los Gobiernos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la transferencia del personal, de los servicios de atención directa y sus recursos, a las respectivas jurisdicciones en las que actualmente estén prestando servicios y se estén ejecutando.

Esta ley será aplicable a las situaciones jurídicas pendientes o en curso de ejecución.

ARTÍCULO 71.- TRANSITORIEDAD: En un plazo máximo de 180 días corridos prorrogables por igual plazo y por única vez, el Poder Ejecutivo Nacional arbitrará las medidas necesarias incluidas las afectaciones presupuestarias y edilicias, que garanticen la contención y protección de las niñas, niños y adolescentes, comprendidos dentro del marco de la Ley 10.903 que se deroga.

ARTICULO 72.FONDOS.- El presupuesto General de la Nación preverá las partidas necesarias para el funcionamiento del Consejo

Federal de Niñez Adolescencia y Familia , la Secretaria Nacional de Niñez Adolescencia y Familia, el Defensor de los Derechos de las niñas , niños y adolescentes y todas las que correspondan para el cumplimiento de la presente ley, atendiendo lo previsto en el artículo 70.

La previsión presupuestaria en ningún caso podrá ser inferior a la mayor previsión o ejecución de ejercicios anteriores. Dispóngase la intangibilidad de los fondos destinados a la infancia, adolescencia y familia establecidos en el presupuesto nacional.

Para el ejercicio presupuestario del corriente año, el Jefe de Gabinete reasignará las partidas correspondientes.

TÍTULO VI DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 73.- Sustituyese el artículo 310 del Código Civil, por el siguiente:

"Artículo 310.- Si uno de los progenitores fuera privado o suspendido en el ejercicio de la patria potestad, continuará ejerciéndola el otro. En su defecto, y no dándose el caso de tutela legal por pariente consanguíneo idóneo, en orden de grado excluyente, el juez proveerá a la tutela de las personas menores de edad."

ARTICULO 74.- Modifíquese el artículo 234 del Código Procesal Civil Y Comercial de la Nación, el que quedara redactado de la siguiente forma:

“ARTICULO 234: Podrá decretarse la guarda:

Inciso 1) De incapaces mayores de 18 años de edad abandonados o sin representantes legales o cuando estos estuvieren impedidos de ejercer sus funciones

Inciso 2) De los incapaces mayores de 18 años de edad que están en pleito con sus representantes legales, en el que se controvierta su curatela”.

ARTICULO 75: Modifíquese el artículo 236 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedara redactado de la siguiente forma:

“Artículo 236: En los casos previstos en el artículo 234, la petición podrá ser deducida por cualquier persona, y formulada verbalmente ante el asesor de menores e incapaces, en cuyo caso se labrará acta con las menciones pertinentes, la que será remitida al juzgado que corresponda.

ARTICULO 76- Derogase, la ley N°10903. los Decretos Nacionales: N° 1606/90 y sus modificatorias, N° 1631/96, N° 295/01.

ARTICULO 77: Esta ley deberá ser reglamentada en un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la sanción de la presente.

ARTÍCULO 78.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las Comisiones, Marzo 17 de 2005.-

Liliana T. Negre de Alonso.- Antonio Cafiero.- Jorge A. Agúndez.- Sonia Escudero.- Norberto Massoni.- Lylia M. Arancio de Beller.- José L. Zavalía.- Ernesto Sanz.- Eduardo Menem.- Diana B. Conti.- Mabel Caparrós.- Elva A. Paz.- Graciela Bar.- María E. Castro.- Mirian Curletti.- Carlos A. Rossi.- Nicolás A. Fernández.- Marcelo E. López Arias.- Silvia E. Giusti.- Ramón E. Saadi.- Guillermo R. Jeneff.- Vilma L. Ibarra.- Sergio A. Gallia.- Alicia E. Mastandrea.- Gerardo R. Morales.- María T. Colombo.- Celso A. Jaque.- María C. Perceval.- Carlos A. Prades.

En disidencia parcial:

Jorge M. Capitanich.
Marcela F. Lescano.

ANTECEDENTE

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
(29 de septiembre de 2004)

PROYECTO DE LEY.

El Senado y Cámara de Diputados,...

LEY DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

TITULO I

CAPITULO I

De la protección general

ARTICULO 1º.- Esta ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte.

Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño, entendido como la plena satisfacción de sus derechos. La omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el

ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces.

ARTICULO 2°.- Es de aplicación obligatoria la Convención sobre los Derechos del Niño en las condiciones de su vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los dieciocho años de edad. Los niños, niñas o adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en todos los ámbitos.

ARTICULO 3°.- Los órganos gubernamentales del Estado garantizan un sistema administrativo y de justicia especializada y procedimientos especiales cuando sean amenazados o vulnerados los derechos de niños, niñas y adolescentes, a efectos de protegerlos.

ARTICULO 4°.- La falta de recursos materiales de la familia, de los representantes legales o responsables de los niños, niñas y adolescentes, sea circunstancial, transitoria o permanente, no autoriza la separación respecto de aquellos, ni su institucionalización.

ARTICULO 5°.- Las políticas públicas de la niñez y adolescencia se elaborarán de acuerdo a las siguientes pautas:

- a) Fortalecimiento del rol de la familia en la efectivización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes;
- b) Ejecución descentralizada con paulatina municipalización de la atención directa;
- c) Gestión asociada de los organismos de gobierno en sus distintos niveles en coordinación con la sociedad civil, con capacitación y fiscalización permanente;
- d) Promoción de redes intersectoriales locales.

ARTICULO 6°.- Las políticas sociales del Estado garantizan con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La prioridad absoluta implica:

- 1. Protección y auxilio en cualquier circunstancia.
- 2. Prevalencia en la exigibilidad de la protección jurídica cuando sus derechos colisionen con los intereses de los adultos, de las personas jurídicas privadas o públicas.
- 3. Preferencia en la formulación y ejecución de las políticas sociales públicas.
- 4. Asignación privilegiada e intangibilidad de los recursos públicos que las garantice.
- 5. Preferencia de atención en los servicios esenciales.

ARTICULO 7°.- Los órganos gubernamentales del Estado nacional tienen la responsabilidad indelegable de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas sociales públicas con carácter federal.

ARTICULO 8°.- Los organismos de gobierno garantizan la protección y sostén de la familia en todos los órdenes, a través de la formulación de políticas públicas adecuándolas a las distintas etapas del desarrollo evolutivo de los niños, niñas y adolescentes.

ARTICULO 9°.- Corresponde a los padres y a la familia ampliada proporcionar a los niños, niñas y adolescentes que la componen el nivel de vida adecuado para su desarrollo integral y oportuno. Es deber de los órganos gubernamentales del Estado la creación de programas para cooperar con los padres y la familia ampliada en el cumplimiento de esa obligación.

ARTICULO 10.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a sus padres biológicos, y a crecer y desarrollarse en su familia de origen.

ARTICULO 11.- Constituye una obligación de los organismos de gobierno en todos sus órdenes asegurar el pleno ejercicio de todos y cada uno de los elementos que conforman la identidad de los niños, niñas y adolescentes, sean éstos referidos a su nombre, vínculos familiares, nacionalidad, raza, etnia u otros aspectos socioculturales. La identificación del recién nacido y su madre, realizada según la legislación vigente, en todo ámbito institucional o domiciliario, así como la inscripción de su nacimiento y la entrega del primer documento nacional de identidad, se efectúan sin cargo. Los órganos gubernamentales del Estado deben actuar con celeridad y con todos los medios científicos, técnicos, administrativos y jurídicos a su alcance, con el objeto de reparar y restablecer plenamente el ejercicio del derecho a la identidad, cuando una persona menor de edad hubiera sido privada de uno o más de sus elementos.

ARTICULO 12.- Las medidas que conforman la protección integral se extenderán a la madre durante el embarazo y el período de lactancia. Cuando se encuentre por debajo de la línea de pobreza, se le garantizarán condiciones dignas para el adecuado desarrollo de su embarazo y crianza de su hijo.

ARTICULO 13.- Los órganos gubernamentales del Estado deben garantizar a la familia que se encuentre por debajo de la línea de la pobreza, prestaciones especiales para que accedan a condiciones dignas para el adecuado desarrollo y crianza de los hijos, hasta los cinco años de edad.

ARTICULO 14.- La mujer privada de su libertad será especialmente asistida durante el embarazo y el parto, y se le proveerán los medios materiales para la crianza adecuada de su hijo mientras éste permanezca en el medio carcelario, facilitándose la comunicación con su familia a efectos de propiciar su integración a ella.

ARTICULO 15.- En toda situación de institucionalización de los padres, los organismos de gobierno garantizan a los niños, niñas y

adolescentes el vínculo y el contacto directo y permanente con aquellos, siempre que no contraríe el interés superior del niño.

ARTICULO 16.- Los órganos gubernamentales del Estado, la sociedad, en particular sus organizaciones sindicales, y la familia coordinarán sus esfuerzos para erradicar el trabajo infantil, y limitar toda forma de trabajo legalmente autorizada cuando impida o afecte su proceso evolutivo, o constituya una actividad riesgosa para su persona, u obstaculice su derecho a la educación, la salud, la recreación y al esparcimiento.

ARTICULO 17.- Los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y todo agente público que detectare la vulneración de derechos de un niño, niña o adolescente, deberá comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión.

ARTICULO 18.- El agente público que sea requerido para recibir una denuncia de vulneración de derechos de los sujetos protegidos por esta ley, ya sea por el mismo niño, niña o adolescente, o por cualquier otra persona, se encuentra obligado a recibir y tramitar tal denuncia, a fin de garantizar el respeto, la prevención y la reparación del daño sufrido, bajo apercibimiento de grave incumplimiento de sus deberes.

CAPITULO II

De la protección especial

ARTICULO 19.- Los órganos del Estado en todos sus niveles con la prelación establecida por las normas, tienen el deber indelegable e imprescriptible de proteger y asistir con medidas de protección especial de derechos a niños, niñas y adolescentes, cuando se produzca amenaza o violación de derechos en perjuicio de uno o varios de ellos, individualmente considerados.

Las medidas tienen por objeto preservar los derechos, restituirlos o reparar las consecuencias de su amenaza o violación.

ARTICULO 20.- Para garantizar los derechos consagrados en esta ley, deberán impulsarse prioritariamente acciones administrativas o judiciales cuando correspondan. El Ministerio Público de la defensa está legitimado para la promoción de acciones judiciales relativas a la exigibilidad de los derechos económicos y sociales de la infancia. El niño, niña y adolescente siempre tiene derecho a contar con asistencia letrada particular.

ARTICULO 21.- Los órganos gubernamentales del Estado, en todos sus niveles brindan asistencia prioritaria a los niños, niñas y adolescentes destinatarios de medidas de protección especial, ya sea a requerimiento de ellos mismos, de sus padres o representantes, de los órganos administrativos, Ministerio Público, o los órganos jurisdiccionales. A tal fin instrumenta los dispositivos y recursos necesarios.

Las acciones de asistencia podrán ser brindadas a través de los organismos públicos competentes y de las organizaciones no gubernamentales legalmente reconocidas y supervisadas.

ARTICULO 22.- Toda medida de protección especial debe establecerse en el marco de lo dispuesto en el Capítulo I de la presente ley a fin de lograr el desarrollo integral y sustentable de niños, niñas y adolescentes, en consonancia con los derechos humanos. Se adoptarán respetando en el interés superior del niño los siguientes principios:

- a) La conservación de sus vínculos familiares, sea manteniéndolo en el grupo de convivencia o asegurando el contacto con sus padres, familia ampliada o responsables;
- b) La recepción de información clara y precisa sobre los motivos de la medida adoptada, su duración y objetivos, tanto por parte del niño, la niña y el adolescente, como por sus padres o responsables;
- c) La medida debe ser fundada en estudios interdisciplinarios, respetar las identidades culturales, guardar proporción con la naturaleza de los hechos que la motivaron;
- d) El establecimiento de la duración y modalidad de ejecución de la medida; e) Toda medida es revisable por autoridad judicial, y en su caso recurrible.

ARTICULO 23.- El Estado garantiza el derecho del niño, niña y adolescente a ser oído y considerado cualquiera sea la forma en que se manifieste, a opinar y a participar en todo asunto o trámite administrativo o judicial que concierna a su persona o a sus intereses, sea directamente, o a través de sus representantes legales cuando le resulte imposible actuar por sí, contando con asistencia letrada.

Su opinión deberá tenerse especialmente en cuenta a los efectos de la decisión, pudiendo recurrir por las vías pertinentes, todas las medidas que afecten sus derechos.

ARTICULO 24.- Cuando proceda la adopción de medidas de protección especial, para preservar, restituir o reparar las consecuencias de la vulneración de derechos o garantías de uno o varios niños, niñas y adolescentes, el órgano competente deberá aplicar prioritariamente las siguientes medidas:

- a) Fortalecer los vínculos familiares para que el niño, niña o adolescente pueda permanecer en el seno de su familia u otorgar la guarda preferentemente a un miembro de la familia ampliada o adulto significativo para el niño, bajo supervisión, asesoramiento y seguimiento familiar, con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones de los padres en el desempeño de la función parental;
- b) Disponer la asistencia económica para el fortalecimiento familiar;
- c) Ordenar la inclusión en programas comunitarios de asistencia integral a la familia;
- d) Determinar la matriculación y asistencia regular obligatoria a establecimientos de enseñanza, otorgamiento de becas de estudio o para jardines maternos;
- e) Disponer la promoción y capacitación básica en oficios y profesiones estimulando vocaciones;

- f) Ordenar la promoción de acciones para lograr la recuperación física, psíquica y la reintegración social;
- g) Ordenar el cumplimiento de las normativas que garantizan los derechos inherentes a condiciones específicas derivados de necesidades especiales por impedimento físico o mental, por esta ley y por normas concordantes;
- h) Localizar a los miembros de la familia, particularmente en los casos de niños, niñas y adolescentes que se encuentren fuera de su país de origen, en condiciones de migración;
- i) Ordenar acciones destinadas a combatir cualquier forma de discriminación especialmente la producida por pertenecer a minorías raciales, étnicas, religiosas o lingüísticas;
- j) Determinar la inclusión en programas especiales de orientación y tratamiento de adicciones;
- k) Ordenar la inclusión del niño, niña o adolescente o de miembros de su familia en alguna o algunas de las medidas de promoción y efectivización de derechos.

ARTICULO 25.- Cuando por circunstancias especialmente graves, los niños, niñas y adolescentes deban ser separados de su medio familiar, los órganos del Estado deben asegurarles la permanencia con su familia ampliada o con adulto significativo para el niño. La medida debe ser excepcional, fundada, limitada en el tiempo, basada en criterios técnicos-científicos interdisciplinarios y respetar las identidades culturales.

Si por aquellas circunstancias, la separación del niño, niña o adolescente de sus padres y familia ampliada fuera permanente, se le garantizará un ámbito familiar con persona idónea para su crianza.

ARTICULO 26.- Las acciones administrativas o judiciales adoptadas tienen como objetivo asegurar al niño, niña y adolescente el pleno goce de sus derechos, la promoción de su formación integral y la reparación de su derecho violado.

Las mismas deben ser evaluadas periódicamente y revocadas o sustituidas cuando así lo indique el interés superior del niño, niña y adolescente, entendido como la plena satisfacción de sus derechos.

ARTICULO 27.- Sin perjuicio de los procedimientos administrativos establecidos en el presente Capítulo, las acciones judiciales de protección especial tramitan:

- a) Considerando parte a la persona menor de edad, padres o representantes legales;
- b) Dando intervención al Ministerio Público y al letrado particular;
- c) Estableciendo que la resolución será recurrible.

El recurso de apelación será concedido en relación y con efecto devolutivo.

TITULO II

Organos Administrativos de Protección de Derechos

ARTICULO 28.- El Sistema de Protección Integral de Derechos de

Niños, Niñas y Adolescentes es un conjunto de organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o privadas, en el ámbito nacional, provincial y municipal, destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y establece los medios a través de los cuales se asegura el efectivo goce de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, demás tratados de derechos humanos ratificados por el Estado argentino y el ordenamiento jurídico nacional. El Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes funciona a través de acciones intersectoriales, desarrolladas por entes del sector público, de carácter central o descentralizado y por entes del sector privado.

La política de protección integral de derechos de los niños, niñas y adolescentes debe ser implementada mediante una concertación articulada de acciones de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. Para el logro de sus objetivos, el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes debe contar con los siguientes medios:

- a) Políticas y programas de protección de derechos;
- b) Organismos administrativos y judiciales de protección de derechos;
- c) Recursos económicos;
- d) Procedimientos;
- e) Medidas de protección de derechos.

ARTICULO 29.- Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, como órgano rector de las políticas de derechos en la materia. Será presidida por un funcionario designado por el Poder Ejecutivo nacional, tendrá carácter interministerial, y representación de las organizaciones de la sociedad civil. Son sus funciones.

- a) Convocar y garantizar el funcionamiento del Consejo Federal y establecer la modalidad de coordinación entre ambos organismos;
- b) Elaborar un plan nacional de acción como política de derechos para el área específica, de acuerdo a los principios jurídicos establecidos en la presente ley, y en coordinación con el Consejo Federal;
- c) Ejercer la representación necesaria ante todos los organismos oficiales de asesoramiento y contralor en materia de medios de comunicación;
- d) Ejercer la representación del Estado nacional en las áreas de su competencia;
- e) Participar en la celebración y ejecución de los instrumentos de carácter internacional que la Nación suscriba o a los cuales adhiera, cuando éstos afecten o se refieran a la materia de su competencia;
- f) Realizar los informes previstos en el artículo 44 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y ejercer la representación del Estado nacional en su presentación, constituyéndose en depositario de las recomendaciones que se efectúen;
- g) Promover el desarrollo de investigaciones en materia de niñez, adolescencia y familia;

- h) Diseñar normas generales de funcionamiento y categorización que deberán cumplir las instituciones públicas o privadas de asistencia y protección de derechos;
- i) Apoyar a las organizaciones no gubernamentales en la definición de sus objetivos institucionales hacia la promoción del ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes, y la prevención de la institucionalización;
- j) Promover políticas activas de promoción y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes y sus familias;
- k) Coordinar acciones consensuadas con los poderes del Estado, organismos gubernamentales y no gubernamentales, fomentando la participación activa de niños y jóvenes;
- l) Propiciar acciones de asistencia técnica a organismos provinciales y municipales; y capacitación para profesionales, técnicos y agentes comunitarios participantes en servicios de atención directa o en el desarrollo de los procesos de transformación política institucional;
- m) Intervenir a requerimiento de la justicia federal en todos aquellos casos que no puedan ser resueltos por los organismos locales;
- n) Gestionar la obtención de recursos financieros nacionales e internacionales para la efectivización de las políticas públicas de niñez, adolescencia y familia;
- o) Transferir fondos a los estados provinciales para la financiación de dichos programas, previa evaluación con reserva del monitoreo de los mismos;
- p) Organizar un sistema único y descentralizado de indicadores, monitoreo, evaluación y control de gestión de políticas y programas de derechos de niñez, adolescencia y familia;
- q) Fortalecer el reconocimiento en la sociedad de niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de derechos, en especial a la salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a la convivencia familiar y comunitaria, a la protección, supervivencia y desarrollo personal, a la identidad, a la libre expresión y de pensamiento, a ser escuchado, a la participación, a no ser discriminado, a la recreación, al juego, al deporte, a la no explotación y a profesar la propia religión; estableciendo la materia en la agenda política como objetivo social prioritario;
- r) Impulsar mecanismos descentralizados para la ejecución de programas y proyectos que garanticen el ejercicio de los derechos de niños, niñas, adolescentes y sus familias;
- s) Asignar los recursos públicos para la formulación y ejecución de políticas previstas en el plan nacional de acción.

ARTICULO 30.- La Secretaría Nacional ejerce sus funciones a través de sus áreas específicas de acuerdo a la forma institucional que se determine.

ARTICULO 31.- Créase el Consejo Federal de Políticas de Niñez, Adolescencia y Familia, el que estará integrado por los Ministros del área social y los responsables del área de infancia y adolescencia de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el presidente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

ARTICULO 32.- El Consejo Federal tendrá funciones deliberativas, de concertación política, consultivas y de formulación de propuestas, cuyo alcance será fijado en el acta de su constitución.

Corresponde a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, convocar a la Asamblea Constitutiva del mismo en un plazo que no exceda los ciento ochenta (180) días desde la fecha de promulgación de la presente ley.

ARTICULO 33.- El Consejo Federal tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

- a) Garantizar una distribución justa y equitativa de los recursos nacionales e internacionales entre los organismos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia;
- b) Concertar políticas de protección integral de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y sus familias;
- c) Elaborar un plan nacional de acción como política de derechos para el área específica, de acuerdo a los principios jurídicos establecidos en la presente ley y en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia;
- d) Proponer reformas legislativas a nivel nacional para adecuarlas a la Convención sobre los Derechos del Niño;
- e) Impulsar reformas legislativas locales para la adecuación de la normativa vigente a la Convención sobre los Derechos del Niño;
- f) Propiciar ámbitos de coordinación y complementariedad entre los distintos poderes del Estado a nivel provincial y regional;
- g) Fomentar espacios de participación activa de los organismos de la sociedad civil de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconocidas por su especialidad e idoneidad en la materia, favoreciendo su conformación en redes comunitarias;
- h) Promover la supervisión y control de las instituciones privadas de asistencia y protección de derechos, y la emisión de opinión previa al otorgamiento de la personería jurídica por parte de los responsables del área específica en las jurisdicciones locales.

Disposiciones generales

ARTICULO 34.- Sustitúyese el artículo 310 del Código Civil, por el siguiente:

"Artículo 310.- Si uno de los progenitores fuera privado o suspendido en el ejercicio de la patria potestad, continuará ejerciéndola el otro. En su defecto, y no dándose el caso de tutela legal por pariente consanguíneo idóneo, en orden de grado excluyente, el juez proveerá a la tutela de las personas menores de edad."

ARTICULO 35.- Deróganse las disposiciones referidas a las personas menores de edad establecidas en la Sección 8, Capítulo III, Título IV del Libro 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

ARTICULO 36.- Derógase la ley 10.903 y las normas legales que se opongan a los derechos fundamentales consagrados en la presente

ley, manteniendo los artículos 393 y 457 del Código Civil su actual redacción.

ARTICULO 37.- Disposición transitoria: La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia asumirá las funciones que en la actualidad ejerce el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, hasta tanto se transfieran las correspondientes a las jurisdicciones locales, con la supervisión del Consejo Federal.

ARTICULO 38.- Esta ley será aplicable a las situaciones jurídicas pendientes o en curso de ejecución.

ARTICULO 39.- Las erogaciones que demande la aplicación de esta ley se imputarán a las partidas pertinentes del Presupuesto Nacional. Facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros a readecuar y reorganizar las partidas de las jurisdicciones y organismos involucrados por la misma.

ARTICULO 40.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

EDUARDO O. CAMAÑO
Eduardo D. Rollano